

Memoria: los primeros ocho días

ÁLVARO ARREOLA
GEORGETTE JOSÉ
MATILDE LUNA
RICARDO TIRADO

PRESENTACIÓN

Este texto es producto de la colaboración de cuatro investigadores del INSUNAM; nació de la urgente necesidad de dar cuenta del complejo y vertiginoso acontecer social que suscitó el sismo de septiembre de 1985.

El trabajo “a ocho manos” se inició por ahí del 28 de septiembre y concluyó a mediados de octubre. Tuvo la intención original de dar un diagnóstico rápido que —destino frustrado— viera la luz pública de inmediato.

Los autores y los editores de esta revista han considerado que el texto original posee interés, por las razones que adelante se explican, pese a lo extemporáneo de su aparición.

La hipótesis básica con la cual arrancó el trabajo fue que el desajuste social derivado del sismo, como toda situación de crisis, reveló de alguna manera el dinamismo y las inercias que portan los procesos, las fuerzas y los proyectos que alientan en lo profundo de una porción importante de la sociedad mexicana: su ciudad capital de la República.

Para captar lo que la tragedia puso en evidencia de manera a veces dramática, los autores decidieron seguir con minuciosidad, por medio de una investigación hemerográfica, el comportamiento de los más importantes actores de la vida pública mexicana durante los primeros ocho días después del siniestro e intentar un esbozo de análisis de lo que resultara.

No se ha cambiado en nada el texto original, sobre todo porque un grupo de colegas que discutió el documento coincidió con que, más allá de los errores y aciertos, el texto había logrado captar una impresión de la acción inmediata de los actores a pesar de los procesos de organización que se dieron después de estos primeros días.

El jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas tuvo lugar un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter con epicentro en las costas del estado de Michoacán, cerca de la desembocadura del río Balsas. Este sismo fue seguido por otro de menor intensidad, 6.5 grados Richter, el viernes 20 a las 19:38 horas. El efecto destructivo de ambos terremotos se dejó sentir sobre todo en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, el sur de Jalisco

y de manera especial en el valle de México, lugar donde se ubica la gran metrópoli mexicana, el conglomerado humano más grande del mundo.

Fue precisamente en la capital de la República donde el saldo de muerte y destrucción alcanzó las proporciones más grandes y dramáticas de las cuales se tenga memoria en México.

Las consecuencias de los terremotos septembrinos dieron lugar a eventos que por su magnitud incidieron en el proceso sociopolítico mexicano. Las acciones, reacciones e interacciones de los diferentes actores políticos y sociales, exhibieron con modalidades específicas problemas característicos de la sociedad mexicana, a la vez que descubrieron acciones sociales novedosas.

En el marco de esta problemática, el objeto de este ensayo es señalar las características y los problemas de la acción inmediata desplegada por diversos actores. Un eje principal en el análisis es la relación entre el gobierno y la sociedad.

El trabajo está compuesto por cuatro secciones: la primera se refiere a los actores políticos e incluye la acción gubernamental en general y el discurso presidencial en particular; asimismo se caracteriza la acción del Congreso y los partidos. La segunda se concentra en los actores sociales; los voluntarios y los damnificados; el sector obrero y el privado; el sector educativo y la Iglesia. En la tercera, se aborda la cuestión de la opinión pública, principalmente en lo que respecta a los artículos y editoriales aparecidos en la prensa diaria. Y en cuarto lugar se destaca la acción de los actores extranjeros. En las conclusiones se recogen los principales problemas de la acción política y social con lo cual se realiza un primer balance de la presencia de los diferentes actores a raíz del sismo.

Por último, cabe señalar que este ensayo se refiere específicamente al período comprendido entre el 19 y el 26 de septiembre y está basado en la información recogida por los nueve principales diarios nacionales: *Excélsior*, *El Universal*, *Novedades*, *La Jornada*, *Unomásuno*, *El Herald*, *El Sol*, *El Día* y *El Nacional*.*

I. LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL

El discurso y la acción presidencial

Las primeras y principales medidas adoptadas por el presidente Miguel de la Madrid para enfrentar la tragedia fueron la puesta en marcha de los planes de auxilio a la población DN-III-E y SMA-85 del Ejército y la Armada, y la integración de dos comisiones encargadas de abocarse a la solución de los problemas provocados por el sismo. La Comisión Nacional fue encabezada por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y la

* Agradecemos al Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A.C. las facilidades brindadas para consultar su material hemerográfico, e igualmente a Hortensia Moreno por su generosidad en la corrección del estilo.

Comisión Metropolitana por el regente capitalino, Ramón Aguirre, y por el subsecretario de Gobernación, Jorge Carrillo Olea como secretario técnico. En esta última comisión intervinieron representantes de diversas secretarías de Estado y de varias instituciones gubernamentales del gobierno federal.

Junto con estas medidas, el presidente de la República determina como prioritario el rescate de las víctimas y el auxilio a los damnificados, suspende su gira por el estado de Michoacán y decreta tres días de duelo nacional.

Ante la situación, el presidente aseguró que el gobierno contaba con medios materiales y humanos suficientes para hacer frente a la tragedia y que “estábamos preparados para regresar a la normalidad”. Por su parte, el secretario de Gobernación afirmó, también en este sentido, que en “términos generales la situación estaba controlada”. Esta primera imagen contrastaba de manera evidente con el caos que privaba en la ciudad de México.

Si bien esta evaluación de la situación fue —al menos en el discurso presidencial— pronto modificada, no sucedió lo mismo con uno de sus principales componentes: la “consigna” de un manejo cauteloso de la información, que tuvo como efecto ahondar la distancia entre el gobierno y la sociedad en esos momentos. Las recomendaciones del presidente a su equipo, en el sentido de informar con amplitud y veracidad y de suministrar información a la ciudadanía para evitar la difusión de rumores sensacionalistas (expresadas los días 20 y 21), la discrepante información oficial y la falta de coordinación administrativa fueron sentidas por la sociedad como formas de ocultamiento.

En el marco de esta fractura entre gobierno y sociedad destaca la indecisión presidencial de comparecer públicamente la noche del jueves 19.

Al día siguiente, después del segundo temblor, el presidente aparece finalmente ante las cámaras de televisión. En contraste con sus declaraciones previas, ahora califica al suceso de “gran tragedia” y reconoce que “nos ha rebasado en muchos casos”. En su discurso, exalta la “extraordinaria solidaridad del pueblo” y apela a la “unidad fundamental de los mexicanos”; demanda “serenidad, entereza y ánimo” y externa su pésame a los deudos de los muertos. Afirma que la capital no está arrasada. Sin embargo, el apoyo moral, el reconocimiento y la solidaridad expresados no incluyeron ofertas políticas concretas que pudieran rescatar un liderazgo político nacional. Algunos elementos, en este sentido, comenzarán a esbozarse en torno a las problemáticas de la reconstrucción y la deuda externa, aunque en los primeros días no alcanzaron una dimensión política significativa.

La reconstrucción estará, en este período, ligada de manera principal al reconocimiento de problemas de índole político administrativo y en particular a una gran oferta de descentralización económica, administrativa, política y cultural; también el presidente promete investigar y aplicar sanciones en caso de responsabilidad e insiste en un manejo honrado de los

fondos recaudados, para lo cual se constituye el Fondo Nacional de Reconstrucción en el que participan las organizaciones cúpula de los "factores de la producción". Al mismo tiempo se instrumentaron otras comisiones menores que van a posibilitar la inclusión de nuevas experiencias localizadas de participación de grupos especializados (técnicos, empresarios, etcétera).

Por otro lado, el gobierno anunció que los donativos se usarían principalmente para la reconstrucción de escuelas y hospitales y el crítico problema de la vivienda para los damnificados es manejado de manera incierta.

Cabe destacar que dentro de la futura reconstrucción y descentralización, la democratización de la ciudad de México fue un problema ausente.

En relación al problema de la deuda externa, el presidente reafirma su posición de cumplir con las obligaciones contraídas, dejando pasar la mejor oportunidad que se había tenido hasta entonces de declarar una suspensión de pagos en el foro de la ONU, la cual hubiera contado con un sensible apoyo de la comunidad internacional, principalmente latinoamericana, y nacional. Sin embargo, sí se percibe un relativo endurecimiento de la posición del gobierno mexicano. En este sentido, el presidente repitió, como lo señaló en su anterior informe presidencial, que se necesitaban nuevas fórmulas para el pago de la deuda (sin especificar cuáles). El secretario de Hacienda expresó, en relación directa con el problema, que no se podía continuar "pidiendo sacrificios al pueblo mexicano sin ofrecerle a cambio un mejor futuro", mientras que el secretario de Relaciones Exteriores externaba en Nueva York que la situación de México debida al pago de intereses de la deuda era una "situación inaceptable" y proponía que, para seguir pagando, era indispensable permitir el crecimiento de los países deudores y, sobre todo, no frustrar los requerimientos y aspiraciones de sus pueblos. Por otra parte, el presidente afirma que será necesario pedir la cooperación internacional en materia económica y desde una perspectiva más amplia, enfatiza en reunión con el gabinete económico la revisión del avance en las medidas de reducción del gasto público.

Ocho días después del sismo, el Presidente comienza a encomendar comisiones específicas a sus colaboradores: al regente capitalino se le dan instrucciones para que presida una comisión que revise los reglamentos de construcción de la ciudad; al secretario de Programación y Presupuesto, para que promueva la revisión de los planes de desarrollo urbano, el estímulo a la descentralización y el fortalecimiento de ciudades del interior. También se convoca a los ciudadanos a hacer propuestas al respecto.

El gobierno capitalino

La acción desplegada por el gobierno capitalino y por diversas agencias gubernamentales de la administración central, organismos descentralizados y empresas paraestatales, si bien varió en función de las instituciones, en términos amplios contribuyó a enfrentar numerosos problemas, principal-

mente mediante la aplicación de medidas de seguridad, de acciones encaminadas a rehabilitar los servicios públicos y de ayuda a la población afectada.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, pronto empiezan a emerger problemas de gran magnitud, catalizados por la gravedad de la situación. En términos amplios, destacó el carácter limitado de la acción gubernamental ante una gran movilización individual y espontánea —como fenómeno principal— a la que se suma la emergencia de nuevas agrupaciones y la de algunas organizaciones sociales ya existentes. Esta movilización se anticipa a la acción gubernamental, después se constituye de manera paralela a ella, para finalmente ser neutralizada por los conductos institucionales.

La distancia manifiesta entre el gobierno y la sociedad parece responder, en parte, a la ausencia de una gran iniciativa política que permita la unidad; y por otro lado —como muchos lo han señalado— a la ausencia de una estructura de representación efectiva en lo que concierne a la forma del gobierno capitalino; pero también, tras los límites de la acción gubernamental, se encontraban los problemas de la propia administración estatal, entre ellos: su configuración “feudal”, el burocratismo y la corrupción, que provocaron una acción de conjunto lenta y dispersa que revelaba la ausencia no sólo de una estructura de participación política, sino también la de una estructura de participación administrativa.

La aplicación de medidas de emergencia por diversas dependencias oficiales, se activó al margen de las comisiones nacional y metropolitana, cuyas tareas de coordinación administrativa resultaron previsiblemente ineficientes. Su función y acción más destacada fue la discordante evaluación de los daños que, junto con la política deliberada de informar minimizando, provocó un contradictorio manejo de datos y opiniones que agudizó el ya de por sí grave problema social de la falta de credibilidad.

Las comisiones se fueron incrementando, mientras las diferentes secretarías informaban sobre sus respectivas áreas de competencia; al mismo tiempo se intensificaban las fricciones entre autoridades civiles, entre éstas y las castrenses, entre la policía y el ejército, entre las autoridades, los voluntarios y los damnificados.

La presencia de funcionarios ante la Cámara de Diputados tuvo el mismo tinte técnico que su acción, pues éstos se limitaron en buena parte a informar sobre las medidas adoptadas y soslayaron el diálogo en torno a cuestiones como la política de vivienda o la democratización de la ciudad de México.

Por último, el sismo evidenció prácticas criminales en la procuración de justicia al encontrarse en las ruinas de los edificios de la Procuraduría, cuerpos de personas que habían sido torturadas; este hecho dañó aún más la imagen del gobierno de México tanto a nivel interno como externo.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Protección y Vialidad del DDF dieron muestras de una muy limitada capacidad para auxiliar a la población (esta última incluso insistió en la desmovilización de los

voluntarios), pero peor aún, la tolerancia de un comportamiento reprochable, como el que mostraron elementos de la Procuraduría General de Justicia del DDF, exhibió la podredumbre existente en la policía y mostró el crítico grado de desprotección ciudadana en la ciudad de México.

Estos hechos contrastaron, sin embargo, con las acciones efectivas de diversas agencias gubernamentales, que contaron con la participación activa de su personal, el cual incluso, en algunos casos (como fue el del Sindicato de Teléfonos de México para mencionar uno), tomó la iniciativa de la acción.

El Congreso de la Unión y los partidos

El 20 de septiembre, el Congreso de la Unión se declaró en sesión permanente en virtud de los acontecimientos registrados el día anterior. Rápidamente cada una de las cámaras integró sendas comisiones (la Especial Pluripartidista, de los diputados y la Especial Transitoria de Emergencia, de los senadores), con el fin de recabar la información que les hacía falta sobre la magnitud del siniestro y de elaborar un paquete de acciones a seguir. En lo inmediato anunciaron la entrega de un mes del salario de los diputados así como la donación de sangre. En lo individual, algunos diputados de izquierda reclamaron castigos para quien resultara responsable y la reformulación del problema habitacional; y ante la amenaza del Fondo Monetario Internacional de cancelar créditos para México, solicitaron la suspensión de pagos.

Confirmando su renuncia a ejercer sus funciones como poder independiente de la federación, las cámaras acordaron que la formación de las comisiones legislativas tendría como objeto prestar toda la ayuda requerida a las comisiones nombradas por el presidente de la República. Y aún cuando no lograron entablar acciones conjuntas con el Departamento del Distrito Federal ni con la Secretaría de Gobernación "por encontrarse sus titulares muy ocupados", los diputados hicieron recorridos por diversos puntos de las zonas más afectadas; ahí tomaron apuntes y recibieron quejas y peticiones que fueron llevadas al seno del recinto parlamentario.

La tregua ideológica acordada el día veinte, en aras de la unidad nacional, se rompió el veinticuatro ante la susceptibilidad que despertaron en la mayoría priista las críticas que el diputado Peñaloza del PRR dirigió contra el primer informe de la Pluripartidista, y por la lectura que Arnoldo Martínez Verdugo hizo de un documento de los damnificados tlatelolcas, el cual fue desmentido por la diputada del PRI de ese distrito. El informe de la Pluripartidista fue finalmente aprobado en la sesión del día 26.

Por su parte, el líder de la Gran Comisión de Senadores, Antonio Riva Palacio, anunció las posibilidades de aplicar el 2% del encaje legal a préstamos para viviendas y a nombre de la Cámara donó 33 millones y medio de pesos para el Fondo de Reconstrucción.

En cuanto a los diferentes partidos que integran el mosaico político nacional, se observó, por un lado, que prácticamente todos se vieron rebasados en sus acciones por la gran movilización ciudadana, a pesar de que éstos constituyeron brigadas, centros de acopio e hicieron llamados a la solidaridad. Sin embargo, dentro de la marginalidad generalizada de los partidos, y en parte gracias a los recursos económicos con los que cuenta, el PRI logró ser un poco más visible.

Por otro lado, en lo que atañe a las propuestas, los partidos que destacan son el PRT y el PSUM, que desde el día 21 el primero y el día 26 el segundo, publicaron en la prensa desplegados en los cuales demandaban básicamente la suspensión inmediata del pago de la deuda y la reformulación del problema de la vivienda.

Y mientras los diputados, los senadores y los partidos desarrollaban estas labores, los voluntarios y los damnificados continuaron su tarea de rescate y de ayuda, callada, pero más efectiva.

II. LOS ACTORES SOCIALES

La reacción fundamental de la población, del común de la gente, de la ciudadanía, es la de la acción individual, espontánea y casi al margen de toda organización.

En el escenario de la gran metrópoli desquiciada, sin electricidad ni agua en muchas partes, sin transportes públicos, con serias deficiencias en la comunicación telefónica, atendidos —quienes pueden— a la “información” contradictoria, parcial e inconsistente de la radio y la televisión estatal, pues desaparece durante varias horas la señal de Televisa, embotellado el tránsito en muchas zonas, cortadas las telecomunicaciones a la provincia y al extranjero, cerrados muchos bancos y comercios, presa de rumores y falsas alarmas, la ciudadanía reacciona de diferentes formas. Unos se dedican a sus actividades diarias, como si nada hubiera pasado; otros se encierran en sus casas; otros más acuden a efectuar compras de pánico en los supermercados; otros —comerciantes— incrementan los precios u ocultan mercancías para especular con los bienes de primera necesidad; y finalmente muchos más, miles y miles, hasta trescientos mil según una estimación, se lanzan rápida y decididamente a auxiliar en las múltiples tareas que la catástrofe impone: ellos son “los voluntarios”.

Los voluntarios son en su mayoría jóvenes que concurren espontáneamente, sin mediar llamado ni convocatoria alguna, ahí donde ellos mismos estiman que su presencia solidaria es útil, convirtiendo a la gran ciudad en un enorme laboratorio de nuevas formas de organización. La frágil organización básica que se constituye es la brigada de voluntarios que integran familiares, vecinos, amigos, compañeros de escuela o de trabajo o gente que apenas en ese momento se conoce. Se trata de una organización pequeña, muy autónoma, ágil, que carece de jerarquías y mandos, y en la inmensa

mayoría de los casos, también de medios e instrumentos adecuados para las tareas que pretenden realizar. Los únicos brigadistas que tienen una organización previa son los *boy scouts*, los miembros de la Cruz Roja, los del socorro alpino, los del CREA y algún otro grupo. En cuanto a recursos, sólo jóvenes como los de las Lomas y la Universidad Anáhuac cuentan con ellos y con relaciones que les permiten aliviar en parte el problema de las comunicaciones, por medio de sus transmisoras de radio; ellos hacen acopio de más de mil toneladas de ropa, alimentos, medicinas, etcétera, y tienen la posibilidad incluso de desplazarse —como lo hicieron— en avión particular a Houston para traer oxígeno.

La mayoría de los voluntarios está desorganizada; son inexpertos, pero tienen una gran voluntad de ayudar, encargándose de inmediato de las más diversas faenas: remoción de escombros, rescate de los atrapados entre las ruinas, acopio y transporte de todo tipo de medios de auxilio, donación de sangre, dirección del tránsito de vehículos, traslado de heridos, organización de albergues, suministro alimenticio, atención médica, etcétera. En muchos casos realizan verdaderos actos heroicos anónimos en los que, por salvar la vida de un desconocido, ponen en peligro la suya propia.

Aunque los bomberos, la policía y el ejército se hacen también visibles en las calles, la presencia de los voluntarios es sin duda decisiva; es la que, rebasando al gobierno y a todo tipo de organización previa, se multiplica ubicuamente, adueñándose de la ciudad y poniendo de manifiesto las posibilidades de una participación ciudadana.

La gran movilización espontánea de la ciudadanía y la apabullante respuesta popular solidaria, junto con el estupor y anonadamiento gubernamental, son quizá las más impresionantes lecciones sociopolíticas del sismo.

Por ello, algunas autoridades tratarán de impedir que la movilización de los voluntarios prosiga —pese al inicial reconocimiento explícito que les manifestó el Presidente— y, sobre todo, que pueda cristalizar en algo más.

Así, los militares, pese a la desesperación que los voluntarios mostraban por salvar vidas, les cerraron el paso y las autoridades capitalinas comenzaron por pedirles que evitaran entrar en la zona de desastre, recordándoles que el centro estaba acordonado y cerrado el tránsito en numerosas avenidas; les recomendaron que entregaran sus donaciones en las delegaciones para evitar “desbordamientos de solidaridad” y confusión. Y de plano, finalmente buscaron someterlos a su control mediante la exigencia de que se registraran y portaran gafetes autorizados, previa investigación “para garantizar su honestidad”. Incluso el Presidente, en otra intervención, hizo a los mismos voluntarios la sugestiva proposición de que fueran “prudentes” y el PRI llegó a decir que era hora de “permanecer unidos con la familia en el seno del hogar”.

Los damnificados más activos fueron los habitantes de los lugares más dañados: los conjuntos departamentales de Tlatelolco y del Multifamiliar Benito Juárez, del barrio de Tepito y de la colonia Morelos. En general se niegan a abandonar sus viviendas o departamentos y permanecen ahí

cerca, acampando en un parque, un camellón o una plaza pública. Se reúnen en prolongadas asambleas, discuten, forman nuevas organizaciones, eligen representantes y confeccionan pliegos petitorios demandando investigaciones, deslinde de responsabilidades, castigo a las autoridades negligentes, pago de indemnizaciones, entrega de casas, etcétera. En un momento posterior acuden a presentar sus demandas ante diversas instancias administrativas (SEDUE, FONAHPO, Contraloría, etcétera), ante la Cámara de Diputados y hasta en Los Pinos. De todos ellos, los más combativos parecen ser los tlatelolcas y los tepiteños, pero hasta el final del período analizado no lograron constituir un frente unido de damnificados.

La presencia de los trabajadores, como tales, aparece mediada por sus organizaciones sindicales y por las más importantes centrales, cuyas determinaciones más frecuentes e inmediatas se refieren en general a la solidaridad con los damnificados, a efectuar una donación en dinero o en especie, a integrar brigadas de auxilio (electricistas, telefonistas, pilotos, petroleros, mineros de Real del Monte, entre otros) y en un momento posterior, a emitir declaraciones más generales que contienen lineamientos de programas y demandas. A este respecto, destaca el plan de ocho puntos dado a conocer por la CTM el día 23, que contempló básicamente: poner a la disposición de los damnificados los edificios sindicales, albergar familias dentro de las casas de los trabajadores, entregar la mercancía que se encuentra en las tiendas sindicales, organizar brigadas de salvamento y demolición que operarían después de los horarios de trabajo, la habilitación de dos mil camiones de volteo y la donación de 10 millones de pesos. Otras propuestas importantes de la CTM fueron: solicitar que se declarara la moratoria del pago de la deuda externa; emplazar a huelga a los patrones que no indemnizaran; y posponer las demandas de aumento salarial. Aparte de la CTM, las siguientes organizaciones obreras manifestaron demandas dignas de ser mencionadas: el Sindicato de Trabajadores del IMSS y el Sindicato Mexicano de Electricistas que se pronunciaron también por el replanteamiento del problema de la deuda externa, y el Congreso del Trabajo que propuso integrar un sistema de comercialización social que garantizara el abasto en las zonas dañadas, evitar la especulación y el encarecimiento de artículos perecederos y también declaró que era necesario un programa de descentralización administrativa con participación sindical, exigir el pago de seguros de vida, poner en marcha un plan de vivienda bajo la rectoría de la SEDUE y el DDF, legislar en materia de construcción, que FONACOT otorgue créditos a quienes perdieron sus enseres domésticos y sus pertenencias, y finalmente, que se entregaran las viviendas construidas por el FOVISSSTE y el INFONAVIT.

Tratándose del sector privado, fue notorio el llamado inmediato del Consejo Coordinador Empresarial a todos los empresarios exhortándolos a prestar auxilio a las autoridades y a las instituciones de socorro y a ser solidarios. También desde el principio se organizó una campaña empresarial para hacer acopio de alimentos y medicinas y el CCE recomendó no

hacer compras de pánico, actitud que fue secundada por diversas organizaciones de comerciantes, distribuidores y mayoristas que aseguraron que el abasto de básicos era suficiente y seguro. No obstante, muchos comerciantes incrementaron sus precios.

Concamín y Canacindra criticaron que el país y las autoridades estuvieran tan faltos de coordinación y preparación y afirmaron que era necesario un plan de emergencia en cuya elaboración colaboraría la iniciativa privada. Otras opiniones empresariales importantes giraron en torno al problema de la deuda externa, el crédito, los impuestos y otros aspectos. Concamín y Canacindra divergieron en sus puntos de vista respecto al problema de la deuda pues en tanto aquélla se opuso a una declaración de la moratoria, la Canacindra pidió (y la Canaco de la ciudad de México la apoyó) un año de gracia sin pago de intereses, la condonación de unos 10 a 13 millones de dólares y reprobó que el país siguiera endeudándose más en el exterior. Por otro lado, la misma Cámara de Transformación solicitó más créditos de FOGAFIN, por 15 mil millones de pesos, para microindustrias afectadas por el sismo. Concamín expresó que resultaría desastroso que se aplicara en este momento un impuesto especial para resarcir daños, Concanaco pidió ampliar la jornada laboral a 12 o 14 horas durante tres o cuatro años, que se evitaran las satanizaciones y enfrentamientos y se fortaleciera la unidad. Otras fueron las declaraciones de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, que sostuvo que deberían ser cesados de sus puestos el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador mexicano en los Estados Unidos, por haberse negado a recibir, en un primer momento, la ayuda estadounidense. Dijeron que esos auxilios sólo se aceptaron hasta que la URSS hizo su propio aporte. Los mismos industriales regiomontanos manifestaron que estaban temerosos de que se produjera una suspensión de pagos de la deuda, se pospusieran las elecciones de noviembre en la entidad y se congelaran las cuentas bancarias. En situaciones caóticas "es posible que los comunistas adquieran el poder" como ocurrió en Nicaragua, agregaron.

Es de mencionarse también la ayuda suministrada por las empresas y los empresarios a título individual, misma que consistió en dinero en efectivo (varios miles de millones otorgados por los prohombres de la iniciativa privada y las empresas y grupos más conocidos: Espinosa Iglesias, Volkswagen, ICA, Alfa, Cervecería Modelo, Industrial Minera México, Bimbo, Ford, entre otros) y bienes y servicios como tiempo de televisión "para servicio social", préstamos de maquinaria pesada y camiones, productos farmacéuticos, servicios de hospital, etcétera. Mención aparte merece Televisa que, sin salirse de su estilo característico, logró legitimarse como "el gran comunicador".

En el sector educativo, destaca la participación de las universidades públicas y privadas en las tareas de auxilio a la población damnificada. Aunque la de las públicas fue más copiosa —de la UNAM participaron unas 7 mil personas, de la UAM 400— y el rector Carpizo hizo llamados,

declaraciones públicas y la donación voluntaria de tres días de sueldo por parte de los trabajadores y personal académico de la UNAM, el hecho es que las universidades privadas y sobre todo la Anáhuac —de donde participaron 500 voluntarios— lograron, con el apoyo intencionado de la televisión comercial, dar una mayor difusión a sus actividades iniciales.

Por último, la Iglesia católica actuó con rapidez y decisión, aunque con poco eco entre los voluntarios. El arzobispo primado de México, cardenal Corripio, ofreció 900 inmuebles (iglesias, parroquias, etcétera) para albergar a los damnificados, anunció la constitución de un Fondo de Ayuda Católica e informó de los donativos recibidos, que ascendían a varios cientos de millones de pesos. Más aún, los eclesiásticos aprovecharon la ocasión para llevar agua a su molino y volvieron a insistir —algunos de ellos situados en las más altas esferas de la jerarquía— en la demanda de que se modificara la legislación que prohíbe la educación religiosa y que la Iglesia y el gobierno dialogaran.

Externaron también que elaborarían un plan de rehabilitación y reconstrucción en coordinación con otros grupos, así como el diseño de un sistema de cooperación voluntaria para la etapa de postemergencia.

En cuanto a los auxilios que estaban prestando, informaron de 8 centros que coordinaban el trabajo de las parroquias e instituciones católicas que captaban recursos y los distribuían; que colegios y universidades católicas habían organizado albergues y grupos voluntarios de apoyo. Exaltaron la contribución económica del Papa, sus oraciones y condolencias, aseveraron que el gobierno obstaculizaba a la Iglesia en sus trabajos y auguraron que el gobierno, como pasó con San Juan Ixhuatepec, finalmente olvidaría a los damnificados.

Otro aspecto digno de mención es la explicación ideológico-religiosa de una de las causas de los catastróficos sismos, que en la versión de uno de los más importantes jerarcas no es otra sino el castigo de Dios por el mal comportamiento de los pecadores mexicanos, incluso ejemplificado específicamente con el caso de la “pecadora” colonia Roma en la que según el prelado había casas de “mala nota”.

III. LA OPINIÓN PÚBLICA

La población que no sintió o no supo inmediatamente de la magnitud del terremoto del jueves 19 de septiembre, tuvo principalmente, vía la radio y la televisión, conocimiento de éste y de sus consecuencias inmediatas. Es básicamente a través de esos dos medios que la mayor parte de la población se enteró de las graves contingencias capitalinas. Por su lógica de aparición, la prensa nacional dio cuenta de los hechos en forma detallada a partir del día 20 del mismo mes.

Responsable como la radio y la televisión de formar corrientes de opinión que vigilan, supervisan y critican además de ejecutar consignas, la

prensa nacional y particularmente quienes en ella se expresan: líderes de opinión, articulistas, especialistas, etcétera, encuentran en los efectos del terremoto y en las primeras acciones instrumentadas por el gobierno una estupenda oportunidad para enjuiciar, a favor o en contra, a la burocracia política y al sistema de gobierno. Pero solamente escasos analistas y determinados periódicos se constituyeron en un foro permanente de opinión y de demandas fundamentalmente para la solución de los problemas.

El fenómeno sísmico descubrió una vez más la polarización de opiniones, algunas demasiado simplistas y banales,* y la dificultad de dar explicación a la sociedad de manera inmediata sobre lo acaecido.

Tres días después de la tragedia, en la gama de opiniones, proposiciones y demandas aparecidas en la prensa nacional, se destacaron cuatro aspectos:

1. Los temas de la sorpresa ante la solidaridad desplegada espontáneamente, el elogio a la dignidad de la gran familia mexicana ante "hechos contingentes", la fortaleza de las instituciones, la inexistencia de liderazgo social, la habilidad de la improvisación, la aparición de la sociedad civil y su capacidad de respuesta, la ausencia de servicios de urgencia y hasta Dios y Satanás en la disputa terrena.

2. Los culpables, señalados en todos los tonos fueron: la negligencia oficial por no actuar oportunamente, la corrupción endémica existente en la nación, la ineptitud de las autoridades de ayer y hoy, la reglamentación obsoleta en el ramo de la construcción, la falta de supervisión urbana, el silencio y ocultamiento de la verdad por parte de las instituciones, el éxodo provinciano a la capital, los peligros de la vida en la megalópolis, la sobrepoblación capitalina, la exagerada concentración y el centralismo político.

3. La mayoría de las opiniones expresadas demandaban: la investigación de posibles culpabilidades, la creación de una política urbana global de servicio al individuo, la exigencia al gobierno de asumir su completa responsabilidad, la petición de un manejo honrado de los recursos de apoyo solidario internos y externos.

4. Se propusieron como soluciones, aunque no por la mayoría: declarar la moratoria del pago de la deuda externa, la reorganización total de las voluntades ciudadanas, una nueva desconcentración, la descentralización, una auténtica renovación moral y una nueva salud ambiental, el congelamiento de rentas, la elección democrática del gobierno capitalino y su municipalización, entre las más importantes.

Por otro lado, las medidas gubernamentales encaminadas a la salvación

* Sin duda, algunas con clara intención ideológica, por ejemplo: Jorge Corrión, Eduardo Borrel o Carlo Coccioli; el primero aseguraba que con el fenómeno telúrico se "comprueba que los fenómenos naturales pueden salvar las distancias existentes para el cambio entre las condiciones objetivas y subjetivas de la sociedad". El segundo aseguró: "Dios no tuvo nada que ver con la catástrofe, quizás Satanás sí tenga alguna intervención en el desencadenamiento de fenómenos geológicos"; y el tercero, con un tono espiritualista, se concretó a decir: "amémonos y recemos".

de vidas y al rescate de personas no pudieron menos que encontrar el apoyo de la prensa.

Al paso de los días, y teniendo como fuente la tragedia capitalina, se comprobó que en fenómenos de esta naturaleza, los periódicos fortalecieron, renovaron o cambiaron sus visiones de la realidad: los menos reconocieron verdaderos cambios; los más continuaron con su dinámica tradicional.

Es de destacar que el acostumbrado control informativo oficial no pudo disfrazar bajo el ocultamiento o la minimización de cifras y de hechos, lo que la crónica y el reportaje dieron a conocer: una ciudad parcialmente destruida, una desorganización gubernamental evidente y una presencia ciudadana invaluable.

Sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo y apenas el gobierno recobró el ánimo, la tendencia al enjuiciamiento de la acción gubernamental disminuyó. Ya no se quiso ver más el formidable acontecimiento de la movilización y volvió a resonar de pronto en la radio, la televisión y buena parte de la prensa, toda la fraseología apologética de los portavoces de la burocracia política.

Si la comunicación es, como se ha dicho, uno de los nervios fundamentales de un gobierno, éstos, visto el acontecer durante los primeros días, estuvieron al borde del rompimiento. La ausencia de una política de comunicación se hizo muy evidente. La manipulación y la carencia de información permitieron descubrir las graves ausencias que en el aspecto de la comunicación sufre el país. En relación con esto, la difusión de rumores fue en parte acelerada por aquellos intereses sociales, políticos y económicos que, apoyados en la inquietud social, pudieron fundir en una misma imagen el desprestigio del sector público con el desprestigio de toda su información, tratando de canalizar para sí la verdad.

En un ambiente de confusión, la disputa en los aparatos ideológicos del poder exhibió, tal vez sin gran exactitud, la disgregación de la sociedad.

IV. LOS ACTORES EXTRANJEROS

A las pocas horas de ocurrido el sismo, la preocupación y solidaridad internacional comenzó a manifestarse en espera de la declaración que el veinte por la noche hizo el presidente De la Madrid, reconociendo que el país no tenía los elementos necesarios para responder ante la magnitud de la tragedia.

Los primeros en dejar oír su voz fueron Fidel Castro de Cuba, exigiendo a los acreedores internacionales de México la suspensión de sus cobros; Daniel Ortega de Nicaragua, que expresó su solidaridad e inició ante la ONU un movimiento de ayuda emergente; y John Gavin, embajador de los Estados Unidos en México, quien declaró que su país estaba listo a ayudar al nuestro en el momento en que así se solicitara.

En relación con la ayuda recibida de la comunidad internacional, tanto

en dinero como en medicina, ropa, equipo y en técnicos especializados, cabe destacar varios hechos:

En primer lugar, el hecho de que la ayuda fue enviada no sólo por los gobiernos de cada uno de esos países, sino también por su población; lo mismo en España que en Alemania, en la URSS o en los Estados Unidos, en Colombia o en Brasil, por mencionar sólo a algunos, se movilizó rápidamente y creó fondos de ayuda económica y realizó envíos de todo tipo a través de sus respectivas autoridades o por iniciativa propia.

En segundo lugar, la manifiesta desconfianza de algunos países como Canadá y los Estados Unidos respecto al manejo de la ayuda económica (situación que también se observó dentro del país), y la determinación previa del destino al que deberán aplicarse los donativos, como fueron los casos de Suiza, la FAO, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo y la ONU.

En tercer lugar, las repercusiones internas y externas de la desorganización oficial en la adecuada y pronta canalización de los recursos enviados.

Como en otras ocasiones, el embajador estadounidense provocó gran revuelo con su intromisión y declaraciones sobre los asuntos internos de México al hablar del número aproximado de 10 mil muertos, del costo probable de la reconstrucción (de mil millones de dólares, aunque el Ministro de Finanzas de la RFA la calculó en 4 mil millones de dólares), y de la necesidad a futuro del gobierno mexicano de modificar su política económica. También el ministro de Salud de España contribuyó con su granito de arena hablando de duplicación de funciones y esfuerzos; los alemanes se quejaron de pérdidas de tiempo y la embajada colombiana presentó su formal protesta por el hallazgo de presos colombianos torturados.

Ahora bien, un aspecto que todo el tiempo se ha ligado con las consecuencias del terremoto y las posibilidades de la reconstrucción, ha sido el del endeudamiento del país.

El mismo día del sismo, el FMI anunció la cancelación de un crédito de 900 millones de dólares para México, porque el país no había cumplido con las metas fijadas por ese organismo. Al mismo tiempo, los voceros oficiales del Fondo insistieron en que esa versión era falsa, aunque de manera poco convincente, y resultó claro que desde antes del 19 existía gran inquietud entre los banqueros internacionales respecto a una inminente ruptura entre el FMI y México.

Pero llegó el terremoto antes de la posible declaración de insolvencia pública, y los portavoces de los países industrializados (Japón, RFA y los Estados Unidos, entre otros) y de los no industrializados (Cuba, Nicaragua, Perú, Brasil, Ecuador, etcétera) manifestaron de distintas maneras y en diferentes foros la necesidad de reconsiderar el pago de la deuda externa de México si se quería ayudar al país en su impostergable reconstrucción. Al FMI y a los banqueros internacionales no les quedó, por el momento, otro camino que el de manifestar su buena voluntad hacia el país y las promesas de reconsiderar su situación.

CONCLUSIONES

El sismo, como fenómeno social y político, exhibió algunos de los problemas y procesos —latentes y manifiestos— de la sociedad mexicana, e insinuó también algunos de sus posibles desarrollos.

El hecho sustancial y candente que emergió a la luz pública fue la fractura entre el gobierno y la sociedad, fenómeno que se expresó de manera nítida en el muy limitado carácter de la acción gubernamental, frente a una sorprendente y enérgica movilización ciudadana. Dicha acción gubernamental, carente de voluntad e imaginación política —pese a algunos aciertos que deben subrayarse dada la magnitud devastadora del siniestro— quedó entrampada dentro de los estrechos márgenes de lo burocrático administrativo.

La otra gran faceta del quiebre entre gobierno y sociedad fue la gran movilización popular y ciudadana que, sin mediar ninguna convocatoria y sin organización, dirección ni proyecto alguno, se posesionó de la ciudad y asumió por su propia cuenta las tareas inmediatas que la catástrofe impuso. Superado su estupor inicial, el gobierno, temeroso de la invasión de sus tradicionales espacios de acción y ante la posibilidad de que la movilización pudiera cristalizar en algo más, buscó neutralizarla. Sin embargo, el repliegue de la movilización parece obedecer más bien a sus propias limitaciones y a sus intrínsecas carencias.

La activación ciudadana no logró un fruto político explícito, pero sí la constatación de que en lo profundo de la sociedad existen enormes reservas de energía, y la aparición de una nueva conciencia de que ante determinada circunstancia, decenas de miles de ciudadanos son capaces de movilizarse para hacer algo efectivo, sin esperar el llamado ni la dirección de nadie.

Los damnificados, por el daño que han sufrido y el agravio que se les infirió, constituyen un grupo social portador de un alto potencial de conflicto y una gran volatilidad política. Sin embargo, las posibilidades de su acción futura están condicionadas a que puedan organizarse y unirse.

Los demás actores políticos y sociales fueron rebasados por la gran movilización ciudadana.

Las cámaras de diputados y senadores mostraron una vez más su dependencia frente al ejecutivo y su marginalidad respecto a los espacios en donde efectivamente se desarrolla el acontecer político.

Los partidos políticos, sobre todo los de izquierda, aún no han logrado implantarse plena y firmemente, ni constituirse en canales de expresión de la gran energía que la movilización puso de manifiesto.

Las organizaciones cúpula de los trabajadores formularon planteamientos y demandas sin gran convicción. Sin embargo, cabe reconocer la movilización rápida de algunos sindicatos y agrupaciones en tareas de auxilio y normalización de los servicios públicos.

Los empresarios parecen haber ganado nuevos espacios de acción: se

integraron a las comisiones gubernamentales, lograron mejorar su imagen pública a través de sus donaciones y auxilios, y lo que es más importante, de algún modo la fractura entre sociedad y gobierno parece alimentar sus más recientes planteamientos en favor del fortalecimiento de la sociedad civil.

La Iglesia, pese a la rapidez y amplitud de su oferta inicial, careció en general de audiencia entre la ciudadanía movilizada (aunque tal vez la tuvo entre algunos de los más sufridos damnificados y entre otros sectores de la población no movilizada), debido al evidente oscurantismo de su discurso ideológico religioso explicativo del sismo y a su reiterada intención de aprovechar la ocasión para ganar más espacios políticos.

Por lo que respecta a la prensa, cabe decir que toda ella se vio capturada por la magnitud del sismo, la movilización social y la sorpresa inicial. Fue visible, aun en los diarios más conservadores, la aparición de información fresca y pertinente sobre el acontecer, pero conforme pasaron los días, poco a poco retornaron en general a sus posturas tradicionales.

Por último, en el plano internacional, los efectos del sismo se condensaron en la solidaridad manifiesta en copiosos donativos, condolencias y visitas de jefes de Estado que tuvieron como consecuencia inmediata la apertura de una coyuntura muy favorable —pero desperdiciada— para el replanteamiento del problema de la deuda externa.